



Asamblea General

Quincuagésimo primer período de sesiones

12^a sesión plenaria

Jueves 24 de octubre de 1996, a las 10.00 horas

Nueva York

Documentos Oficiales

Presidente: Sr. Razali Ismail (Malasia)

Se abre la sesión a las 10.10 horas.

Temas 60 a 81 del programa (continuación)

Debate general sobre todos los temas del programa relativos al desarme y a la seguridad internacional

El Presidente (*interpretación del inglés*): Antes de dar la palabra al primer orador, deseo transmitir a todas las delegaciones mis mejores deseos de un Día de las Naciones Unidas memorable.

Sr. Abuah (Nigeria) (*interpretación del inglés*): Señor Presidente: Permítame expresarles a usted y a los demás miembros de la Mesa las felicitaciones de mi delegación por su elección. Estoy seguro de que, gracias a sus conocidas dotes diplomáticas, nuestros esfuerzos en este período de sesiones se verán coronados por el éxito. Mi delegación le promete su cooperación. También deseo expresar nuestro agradecimiento a su predecesor, el Embajador Erdenechuluun de Mongolia, quien guió con éxito nuestras deliberaciones durante el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General.

Cabe recordar que hace sólo unas semanas, en su quincuagésimo período de sesiones, la Asamblea General votó abrumadoramente a favor de la aprobación del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, negociado en la Conferencia de Desarme, en Ginebra. A pesar de los muchos problemas de procedimiento y de las difíciles

cuestiones sustantivas que rodearon las negociaciones sobre el Tratado en Ginebra, muchas naciones pudieron firmarlo. Por nuestra parte, como indicó este mes el Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria en sesión plenaria, esperamos firmar el Tratado en su momento. Todo esto es notable. Refleja la convicción de la comunidad internacional de que el Tratado representa la clara esperanza de contribuir a nuestro compromiso colectivo hacia un mundo más seguro y libre de armas nucleares. El Tratado ha impuesto a los Estados poseedores de armas nucleares en particular la responsabilidad única de unirse al resto de la humanidad para trabajar en pro de la cesación total de todas las formas de ensayos de armas nucleares.

A tal fin, acogemos con beneplácito las recomendaciones de la Comisión de Canberra sobre la eliminación de las armas nucleares como un paso en la dirección correcta. Con esa iniciativa de Australia está creciendo el consenso internacional sobre la necesidad de eliminar totalmente las armas nucleares y el horror que representan. Recientemente, la Corte Internacional de Justicia, en su dictamen sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, llegó a la conclusión de que:

“Existe la obligación de proseguir de buena fe y llevar a su conclusión las negociaciones con miras al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un control internacional estricto y efectivo.” (A/51/4, párr. 182 f))

Ahora ya no se puede subestimar la urgencia del mensaje de este dictamen.

Esta tendencia está incluida en el programa de acción para la eliminación de las armas nucleares, que figura en el documento CD/1419 de la Conferencia de Desarme, presentado en agosto pasado a la Conferencia de Desarme por el Grupo de los 21 en nombre de 28 miembros de la Conferencia de Desarme, incluida Nigeria. Igualmente, este grupo de países ha pedido a la Conferencia de Desarme que establezca un comité especial sobre desarme nuclear. Cabe recordar a este respecto que la Asamblea General, en su quincuagésimo período de sesiones, pidió a la Conferencia de Desarme, en su resolución 50/70 P, de diciembre de 1995, que estableciera ese comité como cuestión prioritaria. A nuestro juicio, las dificultades que impidieron la aprobación por consenso de la propuesta del Grupo de los 21 relativa al establecimiento del comité deberían eliminarse a fin de que pueda comenzar seriamente en la Conferencia de Desarme la labor relativa a las negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear.

En el programa de acción del Grupo de los 21 se han detallado las medidas urgentes y acuciantes dentro del proceso de desarme nuclear. A este respecto, deseamos reiterar que un instrumento negociado a nivel multilateral y jurídicamente vinculante debe dar garantías a los Estados no poseedores de armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares. Debe decirse que la adhesión de los Estados no poseedores de armas nucleares al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) constituye la base sobre la que se ha construido el régimen de no proliferación. Este grupo de países apoyó la decisión sobre el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares a pesar de sus imperfecciones, y muchos de ellos incluso firmaron el Tratado. Al hacerlo, han ayudado a dar al Tratado la legitimidad que tanto necesita. Es más, cabe reiterar que los Estados no poseedores de armas nucleares han continuado realizando todos los esfuerzos posibles por lograr un mundo libre de armas nucleares, incluido el establecimiento de zonas libres de armas nucleares. Por ejemplo, de conformidad con el Tratado de Pelindaba, África ha renunciado a la opción de las armas nucleares. El compromiso de esos Estados, así como de los Estados de otras regiones, debería inducir a un compromiso similar de los Estados poseedores de armas nucleares de cooperar con el resto de la humanidad a fin de poner fin a la inseguridad generalizada que se deriva de la posesión continuada de armas nucleares.

Por lo que respecta a la inminente entrada en vigor de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de las armas químicas y sobre su destrucción, mi delegación no puede sino expresar su decepción ante el hecho de que los dos

principales poseedores de los arsenales mundiales de armas químicas todavía no han ratificado la Convención. Siguen existiendo cuestiones pendientes relativas a la aplicación del artículo XI de la Convención, que, entre otras cosas, intenta garantizar a los Estados en desarrollo que son Partes en la Convención que la aplicación de la Convención no pondrá en peligro su desarrollo de manera innecesaria. Es necesario abordar estas cuestiones a fin de garantizar un mayor cumplimiento del Tratado y de fomentar su carácter universal.

El problema de las minas terrestres antipersonal es una fuente de preocupación constante para la comunidad internacional. África es una de las regiones del mundo más afectadas por este problema. Nigeria apoya, pues, las diversas iniciativas orientadas a librar al mundo del flagelo de estas armas. Aplaudimos a los países que se han comprometido a detener la producción y la exportación de algunos tipos de minas terrestres. Acogemos con beneplácito el mejoramiento de los Protocolos pertinentes de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Hacemos nuestros todos los llamamientos y medidas orientados a prohibir estas armas particularmente inhumanas. Entretanto, las Naciones Unidas deben explorar formas adicionales de prestar asistencia técnica y humanitaria a los países afectados por las minas terrestres. Debe alentarse a los países que cuentan con la tecnología y la capacidad adecuadas para la remoción de minas a que continúen brindando su asistencia al respecto.

Con relación a las armas convencionales en general, nos sentimos alentados por la conclusión a que llegó la Comisión de Desarme en sus directrices para las transferencias internacionales de armas. Exhortamos a los principales productores y exportadores de armas a que respeten estas directrices y desistan de recurrir a medidas unilaterales.

Debemos seguir prestando atención al programa de las Naciones Unidas en la esfera del desarme y al mecanismo para promoverlo. En estos últimos años, la Asamblea General ha considerado la necesidad de convocar a un cuarto período extraordinario de sesiones dedicado al desarme para reactivar el programa de desarme en el contexto mundial posterior a la guerra fría e identificar las modalidades para el logro de las prioridades. Dicho período extraordinario de sesiones se hace aún más necesario si se tiene en cuenta que la Conferencia de Desarme y la Comisión de Desarme vacilan en cuanto a su programa futuro. Por ejemplo, en el período de sesiones de 1996 de la Comisión de Desarme mi delegación señaló que no se

podía llegar a un acuerdo sobre un tema relativo al desarme nuclear, y en la Conferencia de Desarme ocurrió algo similar. Deberíamos poder llegar a un acuerdo en cuanto a la necesidad de reconciliar las preocupaciones principales de los grupos para el bien de la comunidad mundial. El problema relativo a la fecha de celebración de dicho período extraordinario de sesiones no debería empañar su objetivo.

Sr. Chkheidze (Georgia) (*interpretación del inglés*): Señor Presidente: Esta es la primera declaración que hago en el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, así que permítame que, en nombre de mi delegación, lo felicite por su elección como Presidente de la Primera Comisión. Mi delegación se siente complacida al verlo en la Presidencia y, desde luego, espera con interés cooperar estrechamente con usted y con todos los miembros de la Mesa.

Sin duda alguna, este año estuvo marcado por un acontecimiento de importancia extrema. Dos años y medio de arduas negociaciones sobre el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares llegaron a su término con éxito. Georgia se convirtió en uno de los signatarios del Tratado el 24 de septiembre de 1996. El Presidente de Georgia, Sr. Eduard Shevardnadze, en su declaración de 23 de septiembre de 1996, manifestó que, a su juicio, el Tratado

“repercutirá considerablemente en el proceso de paz, y conducirá a la no proliferación nuclear y a la eliminación de las armas nucleares de nuestro planeta.”
(A/51/412, *anexo*)

Creemos que nuestros esfuerzos creativos conjuntos eliminarán todos los obstáculos que se yerguen ahora en el camino que lleva a la entrada en vigor del Tratado. Todos los Estados deben estar seguros de que su seguridad nacional ya no se verá amenazada. Confiamos en que las Potencias nucleares continúen sus esfuerzos por garantizar un planeta seguro para la posteridad.

Mi país atribuye una gran importancia a la limitación de las armas convencionales y a la prevención del tráfico ilícito de tales armas. En muchos aspectos, los trágicos acontecimientos ocurridos en Abjasia, Georgia, fueron provocados por la ausencia de mecanismos adecuados contra estas tendencias malignas. La escasez de mecanismos de control para prevenir el tráfico de armas convencionales ha conducido a la política agresiva de los separatistas y al genocidio subsiguiente de la población georgiana en la región. Numerosas ciudades y aldeas han sido arrasadas con misiles, proyectiles explosivos y otras formas de tecnología

militar de avanzada, que habían sido adquiridos por grupos militares ilegales y que todavía se encuentran concentrados en el territorio que está bajo su control. Se han formado pandillas de traficantes ilegales de armas, que naturalmente se oponen a todo tipo de proceso de paz.

A causa de la ineficacia del sistema internacional de control, los llamados puntos blancos, en los que las armas no son registradas, se han convertido en verdaderos centros de todo el espectro de las actividades delictivas. Tenemos serias dificultades para controlar el tráfico ilícito de armas a nivel nacional. La decisión relativa al aislamiento político y económico de la región separatista, que se anexa al documento A/51/62 y que fue adoptada en el marco de la Comunidad de Estados Independientes, y el decreto conexo emitido por el Presidente de Georgia, que se anexa al documento S/1996/240, necesitan el apoyo internacional y la aplicación de medidas concretas.

Creemos que la vigilancia del tráfico y el empleo ilícitos de armas debe incluirse en los mandatos de las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz. Ha llegado también el momento de que los informes pertinentes contengan información sobre esta cuestión, con el fin de que se pueda determinar la fuente del delito y adoptar medidas eficaces para prevenirlo. Pensamos, asimismo, que el problema del tráfico y el empleo ilícitos de armas debe considerarse como inseparable de los problemas del tráfico de estupefacientes, el terrorismo y las violaciones graves de los derechos humanos.

La cuestión de la prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal es de gran trascendencia para mi Gobierno. Como es sabido, en la actualidad hay más de 110 millones de minas terrestres en unos 70 Estados, en su mayoría países en desarrollo. Conocemos muy bien las aterradoras estadísticas que indican la cantidad de personas que han resultado muertas, mutiladas o heridas por la acción de estos peligrosos mecanismos. En Georgia, los separatistas abjasios han sembrado una gran cantidad de minas terrestres, que han causado importantes bajas entre la población civil y entre los observadores militares de las Naciones Unidas, quienes, habida cuenta de las circunstancias, se han visto obligados a cerrar tres centros importantes de la región de Gali.

La amenaza constante a la vida de los observadores internacionales y de la población civil impide que la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia pueda cumplir plenamente con su mandato y obstaculiza seriamente el proceso de retorno de cientos de miles de refugiados que ahora están esparcidos por toda Georgia. Hoy enfrenta-

mos el grave problema de la remoción de minas. Su solución fortalecería significativamente la supervisión internacional del conflicto y la posibilidad de un arreglo pacífico.

En abril de 1996 Georgia se adhirió a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. En la actualidad, el Parlamento de Georgia está abocado a la ratificación del Protocolo II enmendado y del Protocolo IV de la Convención. También se está considerando seriamente la cuestión de declarar una suspensión de la utilización de minas terrestres. Celebramos la propuesta presentada por la delegación del Canadá en favor de la concertación para fines de 1997 de un acuerdo internacional por el que se prohíban las minas antipersonal.

Los futuros planes de acción en la esfera de desarme son prometedores e importantes. En relación con la propuesta en favor de la celebración de un cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, creemos que su convocación será apropiada sólo si se acuerdan por consenso las cuestiones que se examinarán. De otro modo, nos enfrentaremos a demoras y contradicciones no deseadas.

El Presidente (*interpretación del inglés*): Tiene la palabra el Presidente de la Conferencia de Desarme, Sr. Ludwik Dembinski de Polonia.

Sr. Dembinski (Polonia), Presidente de la Conferencia de Desarme (*interpretación del inglés*): Sr Presidente: Para comenzar permítame felicitarlo por haber sido elegido para presidir esta importante Comisión y desearle éxito en el desempeño de sus funciones. Felicito además a los otros miembros de la Mesa que le prestan asistencia en sus tareas.

Me dirijo a la Comisión en mi calidad de Presidente de la Conferencia de Desarme a fin de presentar en este foro el informe de la Conferencia sobre la labor realizada en el período de sesiones de 1996. El informe figura en el documento A/51/27, que la Comisión tiene ante sí.

Como se señala en ese informe, en la primera sesión plenaria del período de sesiones de 1996 la Conferencia de Desarme aprobó su agenda y, en respuesta al llamado de la comunidad internacional contenido en la resolución 50/65, aprobada sin votación por la Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones, restableció el Comité ad hoc sobre la prohibición de los ensayos nucleares para

“concluir, como una tarea de la más alta prioridad, un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, de carácter universal, verificable multilateral y efectivamente, que contribuya al desarme nuclear y a impedir la proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos, a fin de que sea abierto a la firma al inicio del quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.” (*resolución 50/65, párr. 2*)

Como resultado de ello, la Conferencia dedicó su total atención y energía a la elaboración de un proyecto amplio de tratado de prohibición de los ensayos nucleares. Durante todo el período de sesiones, que fue largo y arduo pero —en última instancia— gratificante, el Comité ad hoc sobre la prohibición de los ensayos nucleares, bajo la atinada y eficaz Presidencia del Embajador Jaap Ramaker de los Países Bajos, se dedicó denodadamente a la consecución de ese objetivo a fin de cumplir con su mandato en forma oportuna, para lo que contó con la dedicación y buena voluntad de todas las delegaciones. Esos esfuerzos se vieron coronados por el éxito cuando el 10 de septiembre la Asamblea General adoptó la decisión de aprobar el proyecto amplio del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y de pedir al Secretario General que lo abriera a la firma.

Creo que podemos expresar nuestra legítima satisfacción ante el hecho de que alrededor de 125 Gobiernos ya hayan firmado el Tratado y de que ya estén en marcha los trabajos preparatorios para su entrada en vigor. No se puede dejar de señalar la importancia de este Tratado para nuestros esfuerzos colectivos en el fomento de la no proliferación, el desarme nuclear y, en última instancia, la paz y la seguridad internacionales, y cabe esperar que ese logro constituya un paso importante en pro del fortalecimiento del régimen de no proliferación de las armas nucleares y allane el camino para la progresiva eliminación de las armas nucleares.

La Conferencia de Desarme también puede sentirse satisfecha ante el hecho de que la muy postergada cuestión de la ampliación del número de sus miembros finalmente se ha resuelto. Gracias a los decididos esfuerzos de todos, el número de miembros de la Conferencia aumentó en 23. Como resultado de ello, la Conferencia de Desarme es ahora un órgano de negociación más equilibrado y representativo de la comunidad internacional y, por lo tanto, está más capacitada para tratar los complejos desafíos que presenta la etapa posterior a la guerra fría en materia de seguridad. Sin embargo, como bien sabe la Comisión, están aún pendientes varias solicitudes para adquirir la calidad de miembro de la Conferencia. Habida cuenta del hecho de

que, de conformidad con el reglamento de la Conferencia, su composición se revisará a intervalos periódicos, y en virtud de la decisión adoptada por la Conferencia, ya comencé el proceso de consultas con todos los miembros sobre la futura ampliación de la Conferencia e informaré a la Conferencia de Desarme sobre el resultado de esas consultas a comienzos del período de sesiones de 1997.

En el curso del período de sesiones de 1996, la Conferencia también examinó la compleja cuestión de su futura agenda. Al haber finalizado con éxito las negociaciones sobre el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y al haber retirado de su agenda el tema de la prohibición de los ensayos nucleares, la Conferencia de Desarme centrará ahora su atención en la elaboración de una nueva agenda sustantiva. Las consultas celebradas hasta la fecha sobre la cuestión señalan claramente la necesidad de reformar y actualizar la agenda actual de la Conferencia de Desarme.

Es un hecho que la Conferencia de Desarme debe elaborar una nueva agenda que podría reflejar enteramente los cambios ocurridos en los últimos años y lograr un equilibrio entre las cuestiones nucleares y las convencionales, y que se debe seguir centrando en las negociaciones y deliberaciones sustantivas. Al respecto, ya inicié las consultas orientadas a aprovechar los esfuerzos de mis predecesores con miras a sentar las bases para alcanzar un consenso sobre la cuestión del desarme nuclear y a examinar la posibilidad de reactivar los comités ad hoc que no reanudaron su labor en 1996, incluido el Comité encargado de la cuestión de la cesación de la producción de material fisionable.

Confío en que el resultado de las deliberaciones de la Primera Comisión proporcione una base política sólida para nuestros esfuerzos comunes y contribuya a sentar las bases de una orientación y un sentido de la finalidad renovados en la Conferencia de Desarme para el futuro. En lo que a mí respecta, y contando con la cooperación de todos los miembros de la Conferencia, no escatimaré esfuerzos a fin de encontrar los medios que permitan un inicio sin tropiezos del período de sesiones de 1997.

Sólo me resta expresar mi agradecimiento al Secretario General de la Conferencia, Sr. Vladimir Petrovski, al Secretario General Adjunto, Sr. Abdelkader Bensmail, y a su pequeño equipo de dedicados funcionarios por el apoyo y la asistencia constantes y valiosas que brindaron a la Conferencia.

El Presidente (*interpretación del inglés*): La Comisión toma nota del informe de la Conferencia de Desarme que figura en el documento A/51/27.

Sr. Nsangou (Camerún) (*interpretación del inglés*): Señor Presidente: Como esta es la primera vez que mi delegación interviene ante la Primera Comisión en el quincuagésimo primer período de sesiones, permítame que lo felicite por haber sido elegido Presidente de la Primera Comisión y que felicite también a los demás miembros de la Mesa. Estoy seguro de que su amplia experiencia le permitirá dirigir nuestros trabajos para que terminen con éxito. Le aseguro el apoyo y la colaboración de la delegación del Camerún.

También deseo expresar nuestro agradecimiento a su predecesor, el Embajador Erdenechuluun de Mongolia, por haber dirigido de manera competente la Primera Comisión en el quincuagésimo período de sesiones.

Por primera vez desde el inicio de la era nuclear se ha concertado un Tratado que prohíbe todas las explosiones nucleares. La aprobación de la resolución 50/245 de la Asamblea General, de 10 de septiembre de 1996, relativa al Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, es un acontecimiento verdaderamente histórico y un paso fundamental para poner fin a la era de las armas nucleares. Los pueblos del mundo, incluidas las Naciones Unidas, pueden sentirse orgullosos con razón por el destacado papel que han desempeñado para hacerlo posible. El Camerún va a unirse a otros signatarios para adherirse a este Tratado.

La Convención sobre las armas químicas está a punto de entrar en vigor, ya que, esperamos, pronto la ratificará otro Estado. El Camerún no produce ni utiliza armas químicas, pese a lo cual estuvo encantado de ser anfitrión del segundo seminario africano sobre la aplicación de la Convención sobre las armas químicas, celebrado en Yaundé del 13 al 15 de febrero de 1995. En su discurso de bienvenida el Sr. Ferdinand Leopold Oyono, Ministro de Relaciones Exteriores del Camerún, prometió a la comunidad internacional que el Camerún haría todo lo posible para estar entre los 65 ratificadores de esta Convención, que el propio Sr. Oyono firmó el 14 de enero de 1993 en París con el fin de permitir su entrada en vigor. Y hoy ya está hecho. Me complace anunciar a los miembros de esta Comisión que el Camerún es el sexagésimo cuarto ratificador de esta Convención. El instrumento de ratificación fue depositado en poder del Secretario General el 16 de septiembre de 1996, como se anunció en el *Diario de las Naciones Unidas* el 18 de septiembre de 1996. Mi delegación pide a todas las naciones amantes de la paz, en particular a los países que almacenan cantidades enormes de esta arma mortífera, que

respondan a este llamado y ratifiquen la Convención sobre las armas químicas.

Mi delegación está convencida de que el funcionamiento eficaz de los Centros de las Naciones Unidas para la paz y el desarme puede promover en gran medida los esfuerzos de desarme regional. Por lo tanto, mi delegación pide a la comunidad internacional que preste apoyo material y moral a los Centros Regionales de las Naciones Unidas que existen actualmente en África, Asia y América Latina para que puedan funcionar con eficacia. En África, el Centro Regional puede desempeñar una función importante para propiciar una comprensión y un apoyo más amplios a las medidas que adopten las Naciones Unidas en pro de la paz y la limitación de los armamentos en una época en que el continente se enfrenta a numerosos conflictos, que conducen a una mayor adquisición de armas en la región.

Al Camerún le complace la aceleración de la tendencia mundial hacia la creación de zonas libres de armas nucleares. La firma de la Declaración de El Cairo, de 11 de abril de 1996, por la que se establece oficialmente la zona libre de armas nucleares en África merced al Tratado de Pelindaba, refleja las verdaderas aspiraciones de los Gobiernos y los pueblos de África de librarse de la inseguridad nuclear.

Mi delegación también encomia la conclusión del Tratado de creación de la zona libre de armas nucleares del Asia sudoriental, concertado en diciembre de 1995, que podría reforzar la paz y la seguridad en esa zona. La creación de zonas libres de armas nucleares en estas regiones, además de las que existen en América Latina y el Caribe en virtud del Tratado de Tlatelolco y en el Pacífico sur en virtud del Tratado de Rarotonga, demuestra el auténtico interés de los pueblos de esas regiones por vivir en paz y seguridad. Mi delegación respalda los esfuerzos encaminados a establecer zonas libres de armas nucleares en el Oriente Medio y en otras regiones en que se den las condiciones adecuadas.

La creación por parte de las Naciones Unidas del Comité Consultivo Permanente encargado de las cuestiones de seguridad en el África central ha ayudado mucho a reforzar las medidas de fomento de la confianza entre los pueblos de los 11 Estados de la subregión. Uno de los mayores logros de este Comité Consultivo Permanente fue la organización de la primera cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, que se celebró en julio de 1996 en Yaundé.

En esa cumbre los Jefes de Estado o de Gobierno firmaron un pacto de no agresión entre los Estados de la

subregión y también manifestaron su deseo de tomar las medidas adecuadas para su ejecución eficaz. Ayer, mi Jefe de Estado, el Presidente Paul Biya, recibió oficialmente del Secretario General Boutros Boutros-Ghali el texto original firmado del pacto, puesto que el Camerún es el Estado depositario. Además, ambos examinaron problemas relacionados con la paz y la seguridad en la subregión, de conformidad con las recomendaciones de la reunión ministerial del Comité.

Los Jefes de Estado o de Gobierno resaltaron además la urgente necesidad de que los Estados de la subregión establezcan, alienten y mantengan sistemas de gobierno participativos como medio para evitar los conflictos. También subrayaron la necesidad de organizar, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, seminarios de capacitación para oficiales de las fuerzas armadas, la guardia republicana, la gendarmería y las fuerzas de policía de su subregión a fin de promover una cultura de paz mediante una explicación de la función de estas fuerzas en un contexto democrático.

Mi delegación quiere expresar en particular su sincero agradecimiento al Gobierno del Japón por su generosa contribución al fondo fiduciario para financiar la labor del Comité. Los gobiernos de los Estados miembros del Comité celebran este gesto de apoyo que, de hecho, es una medida de fomento de la confianza. Pedimos a todos los demás Miembros de las Naciones Unidas que respalden nuestros esfuerzos para evitar futuros conflictos en esta parte del mundo acosada por la tensión.

La proliferación de las armas pequeñas, especialmente en los países en desarrollo, es una fuente de tensión creciente. Mi delegación acoge con satisfacción la creación por parte de la Asamblea General de un grupo de expertos gubernamentales sobre armas pequeñas, que fue establecido en aplicación de la resolución 50/70 B y cuyo primer seminario se celebró en Sudáfrica en septiembre de este año.

Mi delegación pide a la comunidad internacional que ayude a las regiones o subregiones afectadas por esa amenaza a encontrar soluciones prácticas para evitar la acumulación excesiva y la transferencia de armas ligeras y pequeñas, fenómeno que no sólo pone en peligro la paz y la seguridad sino que también dificulta el desarrollo económico de los países afectados.

El Camerún está seriamente preocupado por la proliferación de las minas terrestres antipersonal, que mutilan y matan indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños

inocentes y producen enormes sufrimientos sociales en las zonas en conflicto. Mi delegación acoge con beneplácito la Declaración de Ottawa, emitida recientemente en la Conferencia de Estrategia Internacional, celebrada en Ottawa del 3 al 5 de octubre, que compromete a 48 gobiernos, incluidos varios de África, a trabajar juntos para garantizar la conclusión más pronta posible de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que prohíba las minas terrestres antipersonal. Mi delegación espera que el acuerdo propuesto tenga en cuenta aspectos humanitarios tales como la rehabilitación de las sociedades y las comunidades afectadas por las minas terrestres.

Mi delegación apoyará cualquier iniciativa que tome la comunidad internacional contra estas armas mortíferas, ya que, en palabras del Presidente Clinton:

“Nuestros hijos merecen caminar sobre la Tierra con seguridad.” (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Sesiones Plenarias, 6ª sesión, pág. 3*)

Mi delegación apoya totalmente esta declaración.

El período posterior a la guerra fría está viviendo una gran transición, a menudo tumultuosa. Es necesario que exista tolerancia y entendimiento mutuo por parte de todos los Estados.

Sr. Tanç (Turquía) (*interpretación del inglés*): Señor Presidente: Para comenzar, deseo felicitarlo calurosamente por su elección a la Presidencia de la Primera Comisión. Estoy seguro de que, bajo su sabio y competente liderazgo, esta Comisión podrá surcar con éxito su arduo programa. También deseo dar las gracias a su predecesor, el Embajador Erdenechuluun, y hacer extensivas mis felicitaciones a los demás miembros de la Mesa.

Los desafíos y riesgos a que nos enfrentamos en la esfera de la seguridad militar exigen medidas conmensurables en cuanto a su alcance y aplicación. Esta característica resalta por sí sola el mandato singular y la autoridad moral y material de las Naciones Unidas para abordar esos desafíos en todas sus dimensiones globales.

Por lo que respecta a la limitación de armamentos y el desarme, la necesidad de poner freno a la tendencia alarmante que muestra la proliferación de las armas de destrucción en masa y las tecnologías para sus sistemas vectores debe seguir ocupando un lugar destacado en nuestro programa. La estructura que complementa el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) en la

esfera de la no proliferación de las armas nucleares se ha visto reforzada con la conclusión con éxito del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y con su apertura a la firma.

A Turquía le complace haberse sumado a la abrumadora mayoría de naciones en los esfuerzos por concluir y aprobar el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Nuestra estrecha asociación con esos esfuerzos se deriva de nuestra política constante de tomar parte activa, como Estado miembro de la Conferencia de Desarme, en las iniciativas regionales y mundiales destinadas a abordar las cuestiones relativas a la proliferación. El Tratado representa una reconciliación óptima de intereses y constituye un paso indispensable hacia el objetivo final de un mundo libre de armas nucleares.

La primera Comisión Preparatoria del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que deberá comenzar su labor el 20 de noviembre de este año, marca claramente el comienzo de un nuevo proceso hacia la aplicación del Tratado. En esta coyuntura, no podemos dejar de recalcar la importancia de que los 44 países ratifiquen este instrumento esencial. Turquía está dispuesta a asumir nuevas responsabilidades en pro de la plena aplicación del Tratado y preparada para hacerlo, y espera que todos los países interesados adopten el mismo enfoque positivo. Esta delegación considera que los países que no firmaron el Tratado pero expresaron su voluntad de asistir a la primera Comisión Preparatoria como observadores deberían poder hacerlo. Después de todo, deseamos que el Tratado sea un instrumento que cuente con una adhesión mundial. Creemos que una actitud receptiva sólo puede aumentar la estatura y autoridad mundiales del Tratado.

La Conferencia de Desarme debe ser encomiada, y no sólo por haber satisfecho las expectativas de la comunidad internacional al haber concluido el Tratado antes de que comenzara el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General. También debe ser encomiada por haber logrado revitalizarse mediante la adopción de la decisión histórica de ampliar el número de sus miembros. La ampliación de la Conferencia de Desarme fue un reflejo fiel de las nuevas condiciones internacionales que imperan en la esfera del desarme y la limitación de armamentos. Creemos que la nueva composición de la Conferencia de Desarme —con 23 nuevos miembros, entre ellos Turquía— fortaleció la universalidad y mejoró la representatividad de este foro al colocarlo a la par de las realidades de la era posterior a la guerra fría.

Aunque no todos los miembros de la Conferencia de Desarme llegaron a un acuerdo sobre el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, es innegable que el Tratado fue el resultado de negociaciones intensas realizadas por todos sus Estados miembros. Ese foro, junto con los esfuerzos de Australia, merece el mayor aprecio y elogio.

No cabe duda de que en el futuro la Conferencia de Desarme desempeñará un papel importante en los esfuerzos de desarme. A este respecto, esperamos que la labor que se está llevando a cabo en la Conferencia de Desarme para actualizar su agenda a fin de cumplir las expectativas de la comunidad internacional dé fruto en breve. Esperamos que en el marco de la actualización de su labor la Conferencia adopte una agenda progresiva y realista que conduzca al consenso entre sus Estados miembros. Turquía opina que la agenda de la Conferencia debe lograr un equilibrio entre las cuestiones relativas a las armas nucleares y las relativas a las armas convencionales.

También creemos que la Conferencia de Desarme debería activar el Comité ad hoc al que a comienzos del año pasado se encomendó el mandato de negociar en 1997 un tratado no discriminatorio, multilateral e internacionalmente verificable de prohibición de la producción de material fisionable para armas nucleares u otros artefactos explosivos nucleares. Al mismo tiempo que intentamos lograr un objetivo multifacético de desarme, debemos tener en cuenta la aspiración de la comunidad internacional de lograr la meta del desarme nuclear.

Ahora deseo referirme al papel fundamental del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Turquía está decidida a fortalecer la eficacia y mejorar la eficiencia del sistema de salvaguardias del Organismo mediante el Programa "93+2". Consideramos que el establecimiento del Comité al que la Junta de Gobernadores encomendó la tarea de elaborar un protocolo modelo es una medida necesaria y útil en pro del aumento significativo de la capacidad del OIEA de detectar las actividades nucleares no declaradas.

El Director General del OIEA, Sr. Hans Blix, en su calidad de depositario de la Convención sobre Seguridad Nuclear, anunció el 29 de julio que había recibido el número necesario de ratificaciones de Estados para que la Convención entrara en vigor. Turquía, que es uno de los 25 países que han presentado el instrumento de ratificación, considera que este importante acontecimiento es un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de la seguridad y hacia la creación de una cultura de seguridad verdaderamente internacional.

Deseo recordar a la Comisión que hoy la Convención ha entrado oficialmente en vigor.

La proliferación de cualquier tipo de armas de destrucción en masa constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La Convención sobre las armas químicas y la Convención sobre las armas biológicas son instrumentos internacionales significativos que demuestran la voluntad de la comunidad internacional de librar al mundo de esos tipos de armas. Los regímenes de no proliferación de las armas de destrucción en masa son vitales para un mundo más seguro. Sin embargo, existe una necesidad igualmente imperiosa de fortalecer esos regímenes añadiendo procedimientos de verificación jurídicamente vinculantes.

Teniendo esto en cuenta, hemos apoyado decididamente el fortalecimiento de la Convención sobre las armas biológicas mediante la incorporación de disposiciones de verificación adicionales. No obstante, nos decepciona que el Grupo intergubernamental ad hoc establecido con el propósito de que elabore propuestas destinadas a fortalecer la Convención sobre las armas biológicas haya completado el 27 de septiembre su quinto y último período de sesiones en Ginebra sin haber finalizado su labor. Esperamos que la comunidad internacional continúe sus esfuerzos destinados a elaborar medidas de verificación que fortalezcan la Convención.

Turquía considera que el Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa (CFE) es una de las piedras angulares de la seguridad y la estabilidad en Europa. Los desacuerdos acerca de una nueva definición de la norma relativa a los flancos se resolvieron en la Conferencia de examen del Tratado, que se celebró en mayo de este año. Instamos a los Estados Partes en el Tratado a que confirmen su aprobación del Documento Final de la Conferencia de examen antes de fin de año. La entrada en vigor del Documento Final, la reafirmación de su validez y la adhesión plena y estricta de los Estados Partes a las metas y objetivos convenidas son de suma importancia. La intención consiste en iniciar un proceso de aplicación mejorado en el que se reflejen plenamente los cambios ocurridos en el entorno de seguridad de Europa. El propósito principal que guiará el proceso es la preservación de los logros del Tratado, que proveen mejores garantías de seguridad a todos los Estados Partes. Queremos recordar a la Comisión que el éxito de este proceso depende en gran medida de que los Estados cumplan estrictamente con las disposiciones del Tratado vigente, hasta tanto entren en vigor las disposiciones enmendadas.

Todos los Estados tienen la obligación de buscar una solución a la tragedia humana causada por las minas terrestres antipersonal. No obstante, durante este proceso se ha puesto de manifiesto que algunas propuestas denotan una falta de sensibilidad para con las diversas realidades regionales en materia de seguridad. El Protocolo II sobre minas terrestres, enmendado el 3 de mayo de 1996, que se anexó a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, es el resultado de un acuerdo alcanzado después de prolongadas negociaciones. Se necesita tiempo para que los Estados Partes ratifiquen el Protocolo II en su forma enmendada y para que más Estados se conviertan en Partes en la Convención y en sus Protocolos. Si bien Turquía comparte plenamente el objetivo de prohibir el uso de minas terrestres antipersonal, también es partidaria de un calendario apropiado de más largo plazo para el proceso de aplicación destinado a lograr este objetivo final.

Todas estas propuestas dirigidas a prohibir las minas terrestres antipersonal comparten la misma laguna. Lamentablemente, no tienen en cuenta la cuestión fundamental relativa a la manera en que la comunidad internacional lograría controlar las minas terrestres que están en manos de organizaciones terroristas. Turquía, plenamente consciente de las amenazas que plantean las minas terrestres en manos de organizaciones terroristas y de los aspectos humanitarios relativos a estos dispositivos mortíferos, opina que todo adelanto en esta esfera debe reflejar el consenso de la comunidad internacional, simplemente en aras de su aplicabilidad y ejecución integrales.

El Oriente Medio reviste una importancia especial para mi país en el contexto de la necesidad de ampliar el alcance de la limitación de armamentos y otras medidas de consolidación de la seguridad para que finalmente abarquen a todas las regiones del mundo.

En el contexto más amplio del Oriente Medio, nos preocupa el estancamiento —que esperamos sea transitorio— en que se encuentra el proceso de paz de esa región. Como firmes partidarios del proceso de paz, al que consideramos la única opción viable para la región, deseamos sinceramente que dicho proceso cobre impulso.

Uno de los principales obstáculos que bloquean el camino a una paz general en el Oriente Medio sigue siendo el terrorismo. Se lo debe eliminar para que predomine la búsqueda de una paz duradera. Abogamos por una mayor cooperación en los planos bilateral, regional e internacional

y estamos dispuestos a participar en ella. Asimismo, esperamos que todos los países contribuyan al logro de este fin.

Como país balcánico, creemos firmemente que la paz, la justicia y la legitimidad en los Balcanes siguen siendo esenciales para la paz y la estabilidad internacionales. Sostenemos que toda medida de cooperación en los Balcanes debe incluir a todos y no excluir a nadie. Estamos participando activamente en la aplicación de los aspectos militares y civiles del Acuerdo de Paz de Dayton y en los esfuerzos internacionales en pro de la reconstrucción y rehabilitación de Bosnia y Herzegovina. También estamos participando, con varios países, en un programa para entrenar y equipar al ejército de la Federación de Bosnia y Herzegovina, con el propósito de dotar a la Federación de los medios para preservar su integridad territorial y asegurar su paridad militar.

Acogemos con beneplácito las elecciones celebradas recientemente en Bosnia y Herzegovina. Opinamos que la realización de estos comicios, a pesar de las dificultades, es un acontecimiento importante para ese país. Esperamos que esto lleve a la creación de un clima político favorable conducente al logro de una paz y una estabilidad duraderas y al establecimiento de estructuras constitucionales, legislativas, administrativas y de seguridad en Bosnia y Herzegovina.

Hoy en día, el intercambio de información sobre el comercio de armas y los controles de las exportaciones de tecnología de doble aplicación se están volviendo cada vez más complejos y amplios. En gran medida, el intercambio de información y los controles de las exportaciones siguen haciéndose a nivel regional. A causa de sus características negativas mencionadas anteriormente, el mecanismo de transparencia en materia de armamentos, establecido con miras a una adhesión universal, dista de alcanzar el objetivo deseado. De conformidad con las resoluciones pertinentes, las partes deben hacer todo lo posible para continuar las negociaciones tendientes a mejorar el sistema actual de transparencia y a evitar la duplicación con otras medidas afines. En el transcurso de dichas negociaciones, es fundamental tener presente la conexión directa que existe entre las transferencias de armas y el terrorismo.

La acumulación de armas convencionales más allá de las necesidades legítimas de defensa es intrínsecamente destabilizadora. La elaboración de políticas responsables con respecto a las transferencias de armamentos con miras a una adhesión mundial, con la debida consideración de las repercusiones de tales transferencias en la estabilidad regional e internacional, no es una prioridad secundaria.

Debemos asegurarnos de que el Registro de Armas Convencionales, de las Naciones Unidas, se convierta en un instrumento más eficaz para la vigilancia y la transparencia en materia de transferencias de armas. Paralelamente, la comunidad internacional debe hacer esfuerzos concertados más intensos para erradicar el tráfico ilícito de armas, no solamente como una medida de control de las armas y de su exportación sino, lo que es más importante, como un componente clave en la lucha internacional contra el terrorismo.

Para terminar, reiteramos nuestro sincero deseo de que el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General llegue a ser un hito importante en el sendero que conduce al próximo milenio. Tenemos que combinar nuestras fuerzas, aunar nuestros recursos y echar a volar nuestra imaginación para construir colectivamente un mundo mejor y libre de armas.

El Presidente (*interpretación del inglés*): Doy ahora la palabra al Observador Permanente de la Santa Sede.

El Arzobispo Martino (Santa Sede) (*interpretación del inglés*): Señor Presidente: Permítame felicitarlo por su elección a la Presidencia de esta importante Comisión. También deseo hacer llegar mis mejores deseos a los demás miembros de la Mesa.

Me dirijo este año a la Comisión con un profundo sentido de esperanza. Esta esperanza se debe a los esfuerzos que ha realizado la comunidad internacional en los últimos meses en pro del desarme nuclear. Esto constituye una contribución importante a lo que el Papa Juan Pablo II predicó en su memorable visita a las Naciones Unidas el otoño pasado:

“La respuesta al miedo que ofusca la existencia humana al final del siglo es el esfuerzo común por construir la civilización del amor, fundada en los valores universales de la paz, de la solidaridad, de la justicia y de la libertad” (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo período de sesiones, Sesiones Plenarias, 20ª sesión, pág. 6*)

En 1995, se prorrogó indefinidamente el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) sobre la base de una serie de principios, entre los que se cuentan los esfuerzos sistemáticos y progresivos por reducir las armas nucleares a escala mundial, con la meta definitiva de la eliminación de ese tipo de armas. Se estableció un proceso de examen con reuniones preparatorias anuales, que deben comenzar a partir de 1997.

Luego, en septiembre, la Asamblea General aprobó el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que de ser ratificado pondría fin a los ensayos nucleares. El 24 de septiembre firmé el Tratado en nombre de la Santa Sede y señalé en mi declaración que la Santa Sede está persuadida de que en la esfera de las armas nucleares, la prohibición de los ensayos y del ulterior desarrollo de esas armas, el desarme y la no proliferación están estrechamente vinculados y de que es preciso alcanzar esos objetivos lo antes posible mediante controles internacionales eficaces.

Además, la Santa Sede estima que estas son medidas orientadas al desarme general y completo y que es preciso que la comunidad internacional toda las aplique sin demoras.

Ese progreso en el logro del desarme nuclear se ve resaltado por el creciente apoyo de los pueblos del mundo a la idea de avanzar en forma más decidida hacia la eliminación de las armas nucleares. La Santa Sede, que siempre ha promovido el desarme nuclear, estima que toda esta actividad es una señal de esperanza.

El derecho internacional es la piedra angular de la seguridad mundial en un mundo cada vez más interdependiente. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de desatender el llamado de atención de la Corte Internacional de Justicia. La obligación contraída en virtud del artículo VI del TNP de celebrar negociaciones de buena fe sobre el desarme nuclear trasciende una mera obligación de conducta. Como lo señaló la Corte, de lo que se trata es de una obligación de lograr un resultado preciso: el desarme nuclear en todos sus aspectos.

La Santa Sede desea invitar a todos los Estados a que revisen su posición a la luz de los recientes acontecimientos. No se puede aplazar en forma indefinida la elaboración de directrices mediante un programa que impulse inexorablemente al proceso hacia el objetivo de lograr cuanto antes la eliminación de las armas nucleares.

El gran esfuerzo que se está realizando a fin de lograr el desarme nuclear puede ser considerado como una medida de diplomacia preventiva, es decir, el desarrollo de la confianza y la buena fe recíprocas y la adopción de medidas para reducir la posibilidad de conflicto entre Estados. La comunidad internacional, con la trágica experiencia de la plétora de guerras y conflictos que han tenido lugar en el siglo XX y que han causado la muerte de más de 100 millones de personas, debe haber aprendido que la prevención de los conflictos es una alternativa mucho más económica que la tarea de afrontar los resultados de un conflicto.

Al respecto, es importante recordar que todas las guerras y conflictos internos que se han producido desde la finalización de la segunda guerra mundial se han librado casi exclusivamente con armas convencionales. De hecho, si bien en las negociaciones sobre la limitación de armamentos se ha reflexionado acerca de la proliferación de las armas de alta tecnología, la dura realidad es que la mayoría de los conflictos —y, seamos muy claros, la mayoría de las muertes y de las matanzas en gran escala— se han llevado a cabo con armamentos de baja tecnología.

Ahora es urgente que la familia de las naciones y las propias Naciones Unidas enfrenten en forma más decidida la magnitud de esa cuestión, que constituye un problema de suma importancia para la vida y la seguridad de las personas en todas nuestras sociedades. Las armas pequeñas, en particular, desempeñan una función importante no sólo en las guerras, el terrorismo y los conflictos internos sino también en la esfera de la delincuencia organizada o local, lo que crea una creciente inseguridad entre los civiles, los que a su vez recurren a las armas, contribuyendo, por así decirlo, a crear un círculo vicioso de violencia e inseguridad.

La Santa Sede acoge con satisfacción las iniciativas que las Naciones Unidas ya han adoptado en la esfera de las transferencias de armas convencionales. Por ejemplo, el Registro de Armas Convencionales, de las Naciones Unidas, a pesar de su alcance limitado, al menos hasta la fecha, demuestra claramente que toda la familia de naciones está genuinamente interesada en la cuestión del tráfico de armas convencionales. Pero aún es preciso hacer más, incluso para obtener información amplia y confiable sobre las transferencias de armas convencionales. Es preciso coordinar y analizar mejor la información de la que se dispone y de la que se puede llegar a disponer a fin de hacer un mapa más detallado de las transferencias de armas convencionales. Se debe contemplar también una mayor cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, habida cuenta de que el tráfico ilícito de armas nucleares se vincula muy a menudo a las operaciones de los mercenarios, al terrorismo, a la delincuencia organizada, al tráfico de estupefacientes y a otras actividades de desestabilización.

Sin embargo, aún no se ha logrado alcanzar un consenso internacional en relación con un marco claro de normas que se puedan aplicar en forma equitativa, constante y efectiva en esa esfera. En algunas ocasiones todavía prevalecen las presiones económicas para vender armas. No obstante, en una esfera en que ni una sola transferencia de armas puede ser considerada moralmente indiferente, las

transferencias de armas no pueden quedar libradas sólo a la ley del mercado.

La familia de las naciones también debe dedicar más atención y estudio a las razones subyacentes tras la compra de armas y a las necesidades en materia de seguridad, reales o creadas, que hacen a la adopción de esas decisiones. Como se subraya en un documento reciente de la Santa Sede sobre la cuestión, el bienestar futuro de los Estados depende mucho más del desarrollo integral de sus pueblos que de su almacenamiento de armas. Sin embargo, en el mundo actual, aún en las naciones más empobrecidas, todavía se puede observar que los gastos en materia de armamentos son mayores que los gastos en materia de educación y de desarrollo social.

Es largo el camino hacia el progreso en la eliminación de la transferencia y utilización ilícitas de armas convencionales. No obstante, algunas medidas son especialmente urgentes. Una de esas primeras medidas es la prohibición de todas las armas que puedan considerarse excesivamente nocivas y que por lo tanto están sujetas al derecho internacional humanitario. La Santa Sede, junto a un número creciente de Estados, señaló explícitamente su deseo de que se imponga una prohibición completa de la producción, utilización, exportación y almacenamiento de minas terrestres antipersonal. Cabe esperar que las iniciativas adoptadas por las Naciones Unidas y por los gobiernos que han tomado la delantera en esa esfera reciban más apoyo. Los Estados no pueden pasar por alto el coro de voces que expresa los sentimientos de conciencia de tantas personas sobre esta cuestión.

Si bien cabe deplorar todos los instrumentos de guerra en un mundo que desesperadamente necesita de los bienes y servicios de la paz, debemos solidarizarnos con el número creciente de víctimas de las minas terrestres antipersonal. En casi 70 países se encuentran aún esparcidas más de 100 millones de minas terrestres, que causan 500 muertos o heridos por semana, con frecuencia entre los civiles y especialmente entre los niños. Cuesta creer que mientras se remueven minas terrestres se están sembrando otras nuevas. Además de las pérdidas humanitarias, los costos sociales y económicos de los campos minados son enormes. La agricultura, el comercio, el desarrollo, los viajes y el juego se ven obstaculizados por la presencia de las minas terrestres.

La Santa Sede formula una vez más un llamamiento para que se ponga fin a esta crueldad. Hace tiempo que debería existir una prohibición mundial de la producción y el empleo de minas terrestres. Muchas naciones han pedido

una prohibición inmediata y completa de las minas terrestres. No hay ningún pretexto para que las naciones se nieguen a hacer de este un criterio universal. Al mismo tiempo, debemos estar alertas para evitar el surgimiento de nuevos tipos de armas inhumanas, como ciertas armas láser que cegarían de manera permanente al adversario y, de hecho, a enormes sectores de la población civil no combatiente.

Utilicemos nuestro conocimiento y los instrumentos de las nuevas tecnologías —en materia de comunicaciones, transporte, ciencia y prolongación de la vida— para crear las condiciones para la paz. Trabajar para impedir las guerras debe ser considerado como una contribución indiscutible no sólo para aliviar los conflictos sino también para preparar el terreno para que florezcan las nuevas flores de la paz en el próximo milenio.

Sr. Kunda (Zambia) (*interpretación del inglés*): Señor Presidente: Puesto que es la primera vez que hago uso de la palabra en esta Comisión, permítame felicitarlos a usted y a los demás miembros de la Mesa por su unánime elección. Mi delegación confía en que bajo su competente dirección la Comisión llevará a cabo sus tareas con éxito. Por lo tanto, les prometemos a usted y a los demás miembros de la Mesa nuestro apoyo incondicional en los futuros trabajos.

El debate general sobre el desarme y la seguridad internacional se celebra este año contra el telón de fondo de una serie de importantes novedades en la esfera del desarme. Entre ellas se incluye la prórroga indefinida del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), que tuvo lugar el año pasado y que se vio complementada por la aprobación el mes pasado del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que posteriormente fue abierto a la firma. Zambia está haciendo los preparativos para firmar el Tratado a pesar de sus deficiencias. Además, la creación de una zona libre de armas nucleares en el Asia sudoriental, que se concretó el año pasado con arreglo al Tratado de Bangkok, se ha visto complementada este año por el Tratado de Pelindaba, por el que el continente africano ha pasado a ser una zona libre de armas nucleares.

La comunidad internacional también se ha beneficiado mucho este año de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio pasado. Al abordar la pregunta que le formuló la Asamblea General:

“¿Autoriza el derecho internacional en alguna circunstancia la amenaza o el empleo de armas nucleares?”
(*resolución 49/75 K, parte dispositiva*)

la Corte, entre otras cosas, llegó a la conclusión unánime de que:

“Existe la obligación de proseguir de buena fe y llevar a su conclusión las negociaciones con miras al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un control internacional estricto y efectivo.” (*A/51/4, párr. 182 f*)

La responsabilidad principal de esta obligación corresponde a los Estados poseedores de armas nucleares. Es bien sabido que a pesar del fin de la guerra fría, de la prórroga indefinida del TNP y de la concertación del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, por el que se prohíben todos los ensayos nucleares que conllevan explosión, hay muchas armas nucleares y sistemas vectores en los inventarios de los Estados poseedores de armas nucleares. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estas armas sean sometidas a mejoras cualitativas por medios no explosivos que no están prohibidos en virtud del régimen del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Un acontecimiento tan siniestro podría reactivar la carrera de armamentos nucleares y por lo tanto socavar los regímenes de desarme arriba mencionados.

Ante esta hipótesis, sigue siendo tan válida como antes del fin de la guerra fría la necesidad de un desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz. Por este motivo se necesita un plan de acción con un calendario determinado dentro del cual se pueda poner fin a la fabricación de armas nucleares y erradica todos los arsenales nucleares existentes y sus sistemas vectores. El Grupo de los 21 de la Conferencia de Desarme presentó ese calendario durante las negociaciones del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Lamentablemente, no contó con el apoyo de los Estados poseedores de armas nucleares. De hecho, y como nos lo han dado a entender, los Estados poseedores de armas nucleares ni siquiera lo aceptaron para debatirlo.

Mi delegación quiere reiterar la opinión que comparten los miembros del Movimiento de los Países No Alineados en el sentido de que la única manera de abordar de manera concluyente la cuestión del desarme nuclear es un programa por etapas, con calendarios convenidos, para lograr un mundo libre de armas nucleares para el año 2020. Mi delegación pone de relieve la campaña incansable del Movimiento para lograr pronto un mundo libre de armas nucleares.

Esto significa que, tras haber eliminado de su agenda el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, la Conferencia de Desarme debe actuar de manera

expedita para empezar las negociaciones sobre la erradicación de las armas nucleares. Con este fin, mi delegación respalda la necesidad de un tratado que prohíba completamente todas las armas nucleares. Por lo tanto, hacemos un llamamiento para que se establezca un comité especial sobre desarme nuclear en el marco de la Conferencia de Desarme con el fin de iniciar negociaciones sobre la eliminación de todas las armas nucleares para siempre.

Mi delegación también apoya el llamamiento formulado por algunos de los oradores que la han precedido para que a comienzos del año próximo se inicien en la Conferencia de Desarme las negociaciones sobre un tratado de cesación de la producción de material fisionable. Esto exige que se vuelva a establecer un comité ad hoc sobre este tema en la Conferencia de Desarme.

La prohibición de la producción de material fisionable es tanto más urgente porque hay existencias excesivas de uranio y plutonio aptos para utilizaciones bélicas y, por lo tanto, es muy elevada la posibilidad de que caigan en manos equivocadas, por ejemplo mediante el robo. Habida cuenta de estas existencias excesivas, es evidente que la cesación de la producción de material fisionable ya no es una medida de desarme, como se pretendió originalmente. Es, a todos los efectos, una medida de desarme colateral o una medida de no proliferación, si así se prefiere. Si se consigue, sería un paso muy importante para consolidar lo obtenido y acelerar el impulso tendiente a lograr el mundo libre de armas nucleares que todos deberíamos aspirar a conseguir para el año 2020, como se refleja en el programa de acción para la eliminación de las armas nucleares, presentado a la Conferencia de Desarme por los miembros del Grupo de los 21.

Además, los Estados no poseedores de armas nucleares siempre han cumplido sus obligaciones en virtud del TNP, y la inmensa mayoría de ellos tienen también en el hemisferio sur las mismas obligaciones en virtud de sus respectivas zonas libres de armas nucleares. Bajo la dirección del Brasil, estos Estados están trabajando con energía en este quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General sobre un proyecto de resolución titulado "Hemisferio sur y áreas adyacentes libres de armas nucleares".

Lo mínimo que han pedido siempre estos Estados a los Estados poseedores de armas nucleares es que les den garantías de seguridad vinculantes. Por consiguiente, mi delegación exhorta a la Conferencia de Desarme a que el año próximo emprenda sin demora negociaciones sobre garantías positivas y negativas de seguridad para los Estados no poseedores de armas nucleares. Los Estados poseedores

de armas nucleares deben comprometerse, mediante un Tratado, a no ser los primeros en emplear o amenazar con emplear armas nucleares; a no utilizar armas nucleares contra los Estados que no poseen estas armas; y, como Estados poseedores de armas nucleares, a ayudar a cualquier Estado no poseedor de armas nucleares si este sufre un ataque nuclear o es amenazado con un ataque nuclear.

La comunidad internacional ha dado pasos gigantescos en la esfera del desarme desde el tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, que se celebró en 1988. Sin embargo, falta muchísimo por hacer. Un avance que habría que lograr es la celebración del cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, conocido como SSOD-IV, en 1999. En este período extraordinario de sesiones debería poder evaluar el progreso realizado en materia de desarme hasta la fecha y trazar un nuevo rumbo en la esfera del desarme para el siglo XXI. Con este fin, respaldamos los llamamientos formulados en esta Comisión para que la Comisión Preparatoria empiece a trabajar a principios de 1997 a fin de preparar el cuarto período extraordinario de sesiones. El consenso sobre este tema significará nuestro compromiso colectivo con el doble objetivo de la no proliferación y del desarme nuclear total al que todos aspiramos con avidez.

Zambia siempre ha mantenido la opinión de que la preocupación por el desarme nuclear total no debe eclipsar en modo alguno la preocupación equivalente de la comunidad internacional por las armas convencionales. Las armas convencionales se utilizan constantemente en varios conflictos en todo el mundo. Continúan perdiéndose vidas y destruyéndose propiedades en forma indiscriminada en los conflictos, muchos de los cuales se producen dentro de Estados y son atizados por rivalidades étnicas. Esto es especialmente preocupante en África, donde los conflictos afectan a muchos países, como evidencian los conflictos fratricidas en Angola, Rwanda, Burundi, Somalia y Liberia, mientras que el Sáhara Occidental continúa bajo dominación extranjera.

En la esfera de las armas convencionales preocupa especialmente la cuestión de las armas pequeñas y las armas ligeras, incluidas las minas terrestres. Para algunos países en desarrollo, esas armas se han convertido en los instrumentos de elección utilizados para mantener conflictos dentro de los Estados. El continente africano se ha visto especialmente afectado por el enorme empleo de las armas pequeñas y las armas ligeras. El catálogo de conflictos en África que he mencionado resalta la necesidad imperiosa de examinar

críticamente la cuestión de la limitación del flujo de esas armas a las zonas en conflicto.

Hoy más que nunca, el amplio uso de las minas terrestres es uno de los desafíos más críticos a que se enfrenta la comunidad internacional. Con aproximadamente 110 millones de minas terrestres esparcidas por todo el mundo, especialmente en 64 países afectados, esas armas continúan haciendo estragos, matando y mutilando a miles de personas todos los años, mucho después de haber finalizado los conflictos. La mayoría de las víctimas son civiles inocentes. Las minas terrestres se han convertido en el arma de elección en los países pobres, ya que son baratas, fáciles de fabricar y de utilizar y difíciles de detectar, y por el contrario su remoción es costosa y peligrosa. Mientras están sembradas, impiden el regreso de los refugiados y dificultan la reconstrucción económica. También se han convertido en un gran impedimento para las operaciones de mantenimiento de la paz, dondequiera que éstas hayan tenido lugar.

En estas circunstancias, mi delegación pide que se intensifiquen los esfuerzos de remoción de minas en el mundo entero. También desea aplaudir a los países que se han unido a la suspensión de la exportación de minas terrestres. Como cuestión más importante, exhortamos a la comunidad internacional a que concluya un acuerdo internacional que prohíba el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas terrestres antipersonal. Por consiguiente, Zambia se une a otras delegaciones de igual parecer en este quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General para apoyar un proyecto de resolución en el que se insta a los Estados a comenzar las negociaciones sobre un acuerdo internacional que logre una prohibición mundial de las minas terrestres.

Sr. Obadi (Yemen) (*interpretación del árabe*): Señor Presidente: En nombre de la delegación de la República del Yemen, deseo felicitarlo por su elección a la Presidencia de la Primera Comisión en este período de sesiones de la Asamblea General. También deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar a los demás miembros de la Mesa por su elección.

La cuestión del desarme general y completo es una de las más importantes que la comunidad internacional tiene ante sí. De hecho, en nuestro mundo y durante esta era la humanidad no tiene otra alternativa que la eliminación total de esas armas destructivas y mortíferas. Por consiguiente, partiendo de esta premisa, se ha centrado la atención sobre esta cuestión y en los últimos años se han realizado muchos esfuerzos a fin de lograr algunos resultados importantes y

positivos en la esfera de la limitación de armamentos y el desarme nuclear, y de hecho se los ha logrado.

Se han tomado decisiones que han llevado a la prórroga indefinida del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y a la creación de zonas libres de armas nucleares en el Asia sudoriental, África, América Latina y el Caribe; y el Pacífico.

La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares y la decisión adoptada por la Comisión de Desarme el pasado mes de mayo sobre las directrices para las transferencias internacionales de armas, así como la reciente aprobación del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares por parte de la Asamblea General, son resultados positivos. El Yemen fue uno de los países que patrocinaron la resolución relativa al Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Nuestro Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores firmó el Tratado durante este período de sesiones de la Asamblea General.

Estos últimos logros deberían impulsar a los gobiernos y a las Naciones Unidas a desempeñar un papel importante y esencial a fin de fomentar soluciones a otras cuestiones pendientes relativas al desarme. Deberíamos proporcionar los medios y arbitrios para fortalecer la paz y la seguridad en varias partes del mundo, y deberíamos esforzarnos por lograr el objetivo del desarme completo y amplio.

Los grandes esfuerzos e iniciativas destinados a establecer zonas libres de armas nucleares en varias partes del mundo fortalecerán el sistema del TNP, reforzando así la paz y la seguridad internacionales. También conducirán al fomento de la confianza entre los países y pueblos que han sufrido conflictos armados. Creemos que todos estos esfuerzos conducirán a un compromiso en favor de la eliminación total de las armas nucleares en las zonas en conflicto. A este respecto, deseamos reafirmar nuestro apoyo a los esfuerzos que se están realizando en esta esfera y a las resoluciones de la Asamblea General relativas a la creación de una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio.

En esas resoluciones se pide —de hecho se insta— a todas las partes directamente interesadas que estudien seriamente la posibilidad de adoptar las medidas prácticas y urgentes necesarias para la adopción de la propuesta de crear una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio, y se recalca la importancia de que todos los países interesados se adhieran al TNP.

Deseamos acoger con beneplácito la adhesión al TNP por parte de los Emiratos Árabes Unidos y de Djibouti. También celebramos la declaración que el Ministro de Relaciones Exteriores de Omán formuló el 1º de octubre ante la Asamblea General con respecto al deseo de su país de firmar el Tratado. Al mismo tiempo, deseamos expresar nuestra preocupación por el riesgo persistente derivado del programa nuclear israelí, que sigue estando fuera del sistema internacional del TNP. También nos preocupan la negativa de Israel a unirse al TNP y los esfuerzos por forzar a otros países del Oriente Medio, con la excepción de Israel, a adherirse al TNP. Creemos que es extremadamente importante pedir a Israel que se una al TNP como paso hacia el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio y hacia el objetivo de librar a la zona de todos los tipos de armas de destrucción en masa.

Una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio debe estar vinculada a la seguridad y la estabilidad mediante el compromiso mutuo —compromiso en pie de igualdad— de todas las partes de la zona de convertirla en una zona libre de armas nucleares y de armas de destrucción en masa.

Mi país acoge con gran satisfacción la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares. Esta opinión consultiva, que fue emitida el 8 de julio de 1996 en respuesta a la resolución 49/75 K de la Asamblea General, es un acontecimiento trascendental en la esfera del desarme porque también expresa la posición del derecho internacional sobre la ilegalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares. Es, en efecto, una contribución positiva de la Corte al logro del desarme total.

La República del Yemen, habida cuenta de su ubicación geográfica sobre el Océano Índico, presta mucha atención a todos los esfuerzos tendientes a mejorar la cooperación entre los países de ese Océano. Por lo tanto, participó en la más reciente reunión —celebrada en Mauricio— destinada a completar los preparativos para un proyecto de carta y un programa especial de trabajo sobre la cooperación entre los países del Océano Índico. En esta ocasión, queremos expresar nuestra satisfacción por los esfuerzos realizados por el Comité Especial del Océano Índico para lograr una zona de paz y por todas las deliberaciones que se están llevando a cabo y cuyo tema principal son las medidas prácticas destinadas a instaurar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.

Exhortamos a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y a los usuarios marítimos del Océano Índico

a que se sumen a la tarea de promover las actividades del Comité con miras a consolidar la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación en la región, a la luz de las resoluciones de la Asamblea General.

El problema de las minas terrestres no ha quedado totalmente resuelto en algunos países del mundo. Es un problema que preocupa a esos países y a la comunidad internacional. Sigue siendo una cuestión primordial y de grandes dimensiones desde el punto de vista humanitario. Destruye personas, tierras y recursos. Encomiamos los esfuerzos cada vez mayores que realiza la comunidad internacional para eliminar las minas terrestres en muchos países, entre ellos el nuestro.

En la República del Yemen, todavía estamos sufriendo la presencia de las minas terrestres como consecuencia de la guerra separatista de mayo de 1994. Deseamos hacer hincapié en que es extremadamente importante que se tomen medidas más prácticas y modernas para la remoción de las minas terrestres, que afectan a grandes sectores de la población y obstaculizan el proceso de rehabilitación y desarrollo. Al mismo tiempo, queremos dar las gracias a las Naciones Unidas, los gobiernos amigos y la Unión Europea por su apoyo y asistencia para la remoción de minas. No obstante, estamos tratando de obtener más ayuda financiera, técnica y de otro tipo para la remoción de las minas terrestres, y necesitamos capacitación para estar en condiciones de realizar nuestras tareas.

Apoyamos plenamente la celebración de un cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme. Pensamos que en dicho período de sesiones se podrían sentar las bases para el futuro en la esfera del desarme y la seguridad. Esperamos que durante el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General se apruebe una resolución concreta en la que se establezca la fecha de celebración de ese período extraordinario de sesiones. Creemos que los resultados de dicho período de sesiones constituirían un medio para preparar la Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

Por último, mi delegación quiere reafirmar que es importante que los gobiernos y las Naciones Unidas continúen realizando esfuerzos en la esfera del desarme. En verdad, deberíamos resolver todas las cuestiones pendientes recurriendo a la voluntad política y a la determinación, sin selectividad, ya que muchas de las cuestiones relativas a las armas nucleares y a las armas de destrucción en masa todavía están por resolverse.

El Presidente (*interpretación del inglés*): Doy ahora la palabra al Sr. Ian Kenyon, Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Sr. Kenyon (Comisión Preparatoria de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) (*interpretación del inglés*): Es un gran placer para mí tener una vez más la oportunidad de informar a esta Comisión acerca de los avances hacia la aplicación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de las armas químicas y sobre su destrucción, uno de los acuerdos multilaterales más ambiciosos de la historia de la limitación de los armamentos y el desarme. Hace casi cuatro años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la resolución 47/39, en la que pidió al Secretario General que, en su calidad de depositario de esta Convención, la abriera a la firma en París el 13 de enero de 1993 y exhortó a todos los Estados a que se hicieran partes en ella a la mayor brevedad posible para contribuir así a su rápida entrada en vigor y al pronto logro de una adhesión universal.

Desde febrero de 1993, la Comisión Preparatoria, que los Estados signatarios establecieron en La Haya a través de la aprobación de la "resolución de París" durante la ceremonia de firma en París, ha venido realizando dos tareas paralelas: la de elaborar los procedimientos detallados para la aplicación de la Convención y la de establecer la infraestructura para la futura Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Hasta la fecha, 160 Estados han firmado la Convención, número relativamente elevado para cualquier acuerdo de desarme multilateral, y las ratificaciones han llegado a 64, lo que significa que sólo falta una para llegar a la cifra de 65 ratificaciones necesarias para que, seis meses más tarde, la Convención pueda entrar en vigor.

Una serie de Estados signatarios han aprovechado la fase preparatoria, que duró más de lo esperado, para llevar a cabo los preparativos necesarios a nivel nacional, y se espera que muchos otros completen sus procedimientos de ratificación en un futuro próximo. En la lista de países que ratificaron la Convención figuran varios que poseen una industria química importante. Sin embargo, la situación todavía dista de ser ideal, ya que sigue habiendo una gran incertidumbre con respecto al calendario de ratificación de los Estados Unidos y de la Federación de Rusia, los dos Estados poseedores de las mayores cantidades de armas químicas y, dicho sea de paso, fervientes partidarios de la Convención durante la etapa de negociación y durante la de preparación. Ahora existe la perspectiva real de que la

Convención entre en vigor sin esos dos Estados. Habida cuenta de las existencias de casi 71.000 toneladas de armas químicas que poseen entre ambos, de su papel de liderato en los asuntos mundiales y de los conocimientos técnicos de que disponen para una aplicación exitosa de la Convención, naturalmente los demás Estados miembros esperan con ansiedad sus respectivas ratificaciones.

A pesar de la incertidumbre relativa al número y la composición de los Estados Partes cuando la Convención entre en vigor, en las reuniones que la Comisión Preparatoria celebró en La Haya durante el año transcurrido se elaboraron una serie de procedimientos de aplicación adicionales que, junto con los que se habían elaborado anteriormente, han sentado los cimientos para una infraestructura segura de la Convención, la organización del personal y las normas financieras y administrativas, así como las modalidades de inspección, que forman una parte importante de las actividades de verificación futuras que se han de llevar a cabo en virtud de la Convención. Sin entrar en demasiados detalles, quiero mencionar concretamente algunos aspectos.

Con relación a los procedimientos y políticas de inspección, la Comisión Preparatoria ha elaborado una serie de disposiciones precisas para las declaraciones y las inspecciones, y ha aprobado proyectos de políticas sobre la confidencialidad, los medios de difusión y los asuntos públicos de la futura organización, todo lo cual también será útil durante la realización de las inspecciones. La Secretaría está redactando una serie de documentos sobre las decisiones adoptadas en la Comisión, que formarán la base de las actividades de inspección de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Entre ellos figura la preparación de un proyecto de manual de inspección, de directrices sobre salud y seguridad, y de un manual de referencia para las instalaciones declaradas. Está a punto de finalizar la preparación de los formularios para las declaraciones de la industria y de un manual para las notificaciones, y se los ha enviado en forma de un borrador a los Estados Miembros para que los utilicen en sus respectivos países. Las inspecciones de ciertos tipos de instalaciones se verán reforzadas por los acuerdos sobre las instalaciones, y se están realizando esfuerzos para elaborar acuerdos modelo con ese fin. Se realizaron cursos prácticos sobre logística y comunicación a fin de examinar los aspectos prácticos de las inspecciones y de facilitar la presentación de declaraciones a la futura secretaría técnica y otras comunicaciones entre la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y los Estados Partes.

En relación con el volumen de las inspecciones, sobre la base de estimaciones proporcionadas a la secretaría en forma estrictamente confidencial con respecto al número de instalaciones militares e industriales declarables, la secretaría revisó sus estimaciones de las instalaciones que será preciso inspeccionar. En la actualidad, se tiene previsto realizar unas 400 inspecciones en el primer año tras la entrada en vigor de la Convención. La secretaría participó en varias inspecciones de demostración realizadas por los Estados Miembros a fin de ajustar los procedimientos de inspección sobre la base de la experiencia adquirida en la práctica. Además, varios Estados Miembros organizaron actividades de simulación con el objeto de elaborar los acuerdos sobre las instalaciones en relación con las instalaciones de las listas 2 y 3 con arreglo a la Convención. En noviembre se realizará otro ejercicio en relación con una instalación de la Lista 1.

Con respecto al equipo, se ha emprendido la tarea de adquirir el equipo de inspección necesario que se utilizará inicialmente para capacitar a los futuros inspectores. Se ha determinado el equipo que se necesitará para que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas aplique el programa completo de inspecciones y se adquirirá una cantidad inicial una vez que 65 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación.

En relación con el apoyo técnico, el 11 de septiembre se inauguró en Rijswijk, que linda con La Haya, el laboratorio y almacén de equipo de la organización. Asimismo, se realizó una evaluación cooperativa del equipo de inspección adquirido inicialmente con fines de capacitación a fin de determinar si el equipo es adecuado para la realización de inspecciones. Se están realizando pruebas de eficiencia entre laboratorios, en las que participan diversos laboratorios de diferentes partes del mundo. Ello permitirá que la organización acredite a un número reducido de laboratorios en todo el mundo que cumplan con las normas analíticas de la organización, con lo que se establecerá una red mundial para cuando la Convención entre en vigor.

En relación con la capacitación, los esfuerzos en pro de la contratación y capacitación de los inspectores de la futura organización revisten particular importancia para realizar inspecciones seguras y eficientes con un nivel mínimo de intrusión y un riesgo mínimo de vulneración de la información comercial. Se ha diseñado un plan de capacitación de 20 semanas para preparar a los futuros inspectores, que consta de tres módulos principales, y están en vías de concertación los arreglos prácticos de capacitación, que abarcan desde los materiales didácticos hasta las instalaciones y el equipo necesarios para la capacitación. La capaci-

tación se llevará a cabo en China, la República Checa, Francia, Finlandia, Alemania, la India, el Japón, los Países Bajos, Rumania, la Federación de Rusia, la República Eslovaca, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, y posiblemente en otros países. De conformidad con los planes actuales, para cuando la Convención entre en vigor se habrán contratado 140 inspectores; y seis meses después se contratarán otros 71. Se capacitará a un total de 240 futuros inspectores en dos grupos de 160 y 80, respectivamente. En gran medida, han finalizado las entrevistas para la contratación de futuros inspectores, que comenzaron a mediados de 1995 y que se llevaron a cabo en La Haya y en otros centros del mundo. Ya se han seleccionado postulantes de unos 60 países para ser capacitados en el primer grupo. Se están realizando esfuerzos para completar la selección de postulantes para el segundo grupo, para el que ya se ha seleccionado a más de 50 candidatos. Los futuros inspectores serán nombrados en la secretaría técnica de la organización si finalizan el curso de capacitación con éxito y aprueban los exámenes médicos y lingüísticos necesarios y —naturalmente— si sus países ratifican la Convención.

En relación con la infraestructura de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, se ha avanzado en forma sostenida en la tarea de establecer la infraestructura de la futura organización. En la actualidad, unos 120 funcionarios que representan a casi 50 países están trabajando en la secretaría técnica provisional. Se está trabajando en el establecimiento de un sistema seguro de gestión de la información que no sólo ayudará a la eficaz recopilación, almacenamiento y evaluación de la información relativa a las actividades de verificación sino que también garantizará la confidencialidad de los datos industriales y de otra índole comercialmente vulnerables provenientes de los Estados Partes.

Para fin de año se tiene previsto contar con los requisitos mínimos necesarios al respecto. El 9 de mayo de este año comenzó la construcción de un nuevo edificio para la sede de la organización en La Haya, y se tiene previsto que estará terminado para comienzos de 1998. En la actualidad, está en vías de negociación el acuerdo relativo a la sede entre la organización y el Estado anfitrión, los Países Bajos. Tras haber elaborado el reglamento financiero de la organización, la Comisión se ha dedicado a la elaboración del reglamento del personal. En breve se examinará el presupuesto para el primer año completo de funcionamiento de la organización. Según las propuestas preliminares presentadas por la secretaría, se estima que será de unos 100 millones de dólares para apoyar las actividades de unos 500 funcionarios.

Así pues, ha concluido la etapa de los preparativos teóricos y está por comenzar una nueva fase de inversión real de tiempo, recursos y personal en la infraestructura de la futura organización. Sin embargo, la futura aplicación de la Convención no se ve libre de escollos y dificultades. Al comienzo de su labor, la Comisión Preparatoria había adoptado varias premisas. Una de ellas era la premisa de que los dos principales poseedores de armas químicas —los Estados Unidos y la Federación de Rusia— figurarían entre los primeros 65 Estados que ratificarían la Convención. No se ha concretado en el Senado de los Estados Unidos el tan esperado voto afirmativo sobre asesoramiento y consentimiento para la ratificación de la Convención antes del 14 de septiembre. No obstante, el Presidente Clinton, al hablar ante la Asamblea General, señaló:

“Lamento profundamente que el Senado de los Estados Unidos todavía no se haya pronunciado sobre la Convención, pero quiero asegurar a esta Asamblea y a los pueblos del mundo que no dejaré que muera este Tratado ...” (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Sesiones Plenarias, 6ª sesión, pág. 2*)

Esas fueron palabras alentadoras, pero por el momento la cuestión de la ratificación por parte de los Estados Unidos debe esperar tiempos más propicios. La Federación de Rusia ha progresado en la elaboración de un programa amplio para la destrucción de su arsenal de armas químicas, en el que se incluye la identificación de los lugares de destrucción, la tecnología necesaria para la destrucción, la protección del medio ambiente, los organismos responsables y las necesidades generales en materia de financiación y que fue aprobado por el Presidente Yeltsin. En la Duma se inició el examen de un proyecto de ley por el que se establecerá el marco jurídico para la destrucción. Se nos ha asegurado que el Gobierno presentará la Convención ante la Duma para su ratificación en el futuro próximo. Sin embargo, aún no hay un calendario claro para la ratificación por parte de ese órgano.

Es enorme la cantidad de recursos que se necesitarán para que esos dos Estados poseedores de armas químicas satisfagan en un período de 10 años los requisitos de la Convención en materia de destrucción. En la Federación de Rusia el proyecto de plan para la destrucción de unas 40.000 toneladas de armas químicas tiene un costo estimado de unos 16,6 billones de rublos (3.680 millones de dólares). Habida cuenta de la existencia de otras prioridades, es difícil obtener esos recursos. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el total de armas químicas que hay actualmente en ese país asciende a un poco más de

31.000 toneladas y los recursos necesarios para su destrucción serán de unos 12.000 millones de dólares. Desde junio de 1991 se está llevando a cabo la destrucción de las armas químicas de los Estados Unidos en el atolón de Johnston, en el Océano Pacífico. Me complace observar que la primera instalación para la destrucción de armas químicas ubicada en el territorio continental de los Estados Unidos —que está situada en Tooele, Utah, y que tuvo la suerte de visitar hace unos meses— comenzó a incinerar armas químicas el 22 de agosto. Por lo tanto, se puede señalar con cierta confianza que el programa de destrucción en los Estados Unidos, que tienen que destruir su arsenal completo de armas químicas para el año 2004 en virtud de una ley aprobada por el Congreso, está bastante bien encaminado.

Otra posible fuente de preocupación entre los Estados Miembros es que todavía no ha entrado en vigor el acuerdo bilateral entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia sobre la destrucción y no producción de armas químicas. Esto pone en tela de juicio otra premisa básica de la Comisión, es decir, que este acuerdo estaría en vigor y en proceso de aplicación cuando entrase en vigor la Convención. Esto permitiría que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas limitase su verificación a las medidas complementarias a las que se llevarían a cabo en virtud de este acuerdo bilateral. En esencia, esto significaría que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no tendría que dedicarse a verificar la destrucción, sino que sólo enviaría observadores con los equipos nacionales de estos dos Estados, que se inspeccionarían mutuamente. Si el acuerdo no se está aplicando en el momento de entrada en vigor de la Convención, habrá que aumentar el número de inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

A principios de este mes la Secretaría realizó un análisis detallado de los recursos adicionales que se necesitarán para aplicar la Convención a falta del acuerdo bilateral sobre la destrucción y no producción de armas químicas entre esos dos Estados. Este análisis indica que los probables costos adicionales derivados de la contratación de hasta 70 nuevos inspectores, la adquisición de equipo adicional para las inspecciones y la realización de inspecciones a una escala mayor serían del orden de los 18 millones de dólares.

En el plano nacional, los preparativos para la aplicación de la Convención suponen, entre otras cosas, el establecimiento o designación de una autoridad nacional viable que sirva de enlace con la futura Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la promulgación de la legislación necesaria, el establecimiento de un sistema de base de datos para procesar y archivar las declaraciones, la

capacitación de guías nacionales para las actividades de verificación en virtud de la Convención, y —por último, pero no menos importante— la puesta en marcha de un amplio programa de educación para la industria. La secretaría, por su parte, ha estado ocupada en difundir información pertinente sobre la Convención y sobre la Comisión Preparatoria a través de distintos medios: colaboraciones por escrito, el establecimiento de un grupo de divulgación para la industria, y la participación, cuando lo permiten los recursos, en acontecimientos nacionales relacionados con la aplicación de la Convención.

Hasta la fecha se han organizado 17 seminarios regionales y cinco cursos para el personal de las Autoridades Nacionales. Para este año están programados dos cursos más para el personal de las Autoridades Nacionales: uno para Sudamérica y el Caribe, que se celebrará en las Antillas holandesas, y otro que estará destinado mayormente a países miembros de África y que se celebrará en Tanzania. Sin embargo, la responsabilidad definitiva de los preparativos a nivel nacional les corresponde a los propios Estados Miembros. A pesar de muchos esfuerzos, hay pocas noticias de los preparativos internos en una serie de Estados signatarios. Habrá que rectificar esta situación antes de que la Convención entre en vigor.

La propia Comisión Preparatoria se enfrenta a una serie de tareas inconclusas en el futuro inmediato. Por ejemplo, todavía tiene que ponerse de acuerdo sobre algunas cuestiones relativas a las declaraciones relacionadas con la industria química y las instalaciones de armas químicas y sobre las medidas de verificación que han de aplicarse a las inspecciones de armas químicas, a las instalaciones de producción de armas químicas convertidas para usos civiles y a las instalaciones antiguas y abandonadas de armas químicas. También hay que resolver la cuestión del momento de armonizar los controles de las exportaciones teniendo en cuenta las disposiciones de la Convención relativas al desarrollo económico y tecnológico.

El nuevo edificio de la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas estará listo a comienzos de 1998, y habrá que encontrar alojamiento provisional apropiado para el personal ampliado de la secretaría si la Convención, como se espera, entra en vigor en la primera mitad de 1997. Se necesitará comprensión política antes del primer período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes sobre cuestiones tales como la composición del Consejo Ejecutivo y la estructura administrativa superior de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Los preparativos detallados para el primer período de

sesiones de la Conferencia de los Estados Partes deberán estar listos antes de que entre en vigor la Convención.

No es sorprendente que en el período actual de relativa incertidumbre acerca de la aplicación futura de la Convención algunos críticos hayan empezado a poner nuevamente en duda la capacidad de la Convención de verificar en forma eficaz la destrucción de las armas químicas existentes y de evitar la proliferación futura. También se ha aducido que la Convención no es ni será universal, y que en todo caso impone una carga inaceptable a la industria química y crea una burocracia difícil de manejar. La realidad no confirma estas preocupaciones. Es cierto que la Convención no puede garantizar de modo concluyente que las armas químicas no vayan a ser producidas ni utilizadas por Estados que son propensos al engaño o por terroristas. Lo que hará la Convención es crear un sistema que hace que eso resulte sumamente difícil en la práctica debido a su sistema de vigilancia de los productos químicos dedicados, a sus disposiciones relativas a las inspecciones por denuncia, a sus sanciones económicas y políticas y a la creación de un foro para decidir medidas colectivas para luchar contra la amenaza de las armas químicas. Pero lo que es igualmente importante es que la Convención ayudará a crear la norma contra el empleo de armas químicas para hacer que esa opción, aun cuando sea posible desde el punto de vista militar, resulte políticamente inaceptable.

Estas disposiciones son las que ayudarán a hacer que la Convención sea más universal a medida que pase el tiempo. La inmensa mayoría de los Estados ya se han comprometido a contraer obligaciones en virtud de la Convención, y, a medida que se la empiece a aplicar, las sanciones económicas, conjuntamente con el carácter inaceptable desde el punto de vista político de recurrir al empleo de armas químicas, convencerán a los que están al margen del régimen para que trabajen dentro del sistema. La industria química, al haberse informado acerca de la Convención y de cómo funcionará, ya está convencida de esto, y el respaldo de este sector en el mundo entero lo confirma. El cuidadoso equilibrio que existe en la Convención entre la vigilancia, la necesidad de proteger la información confidencial y la necesidad de no crear cargas innecesarias reconoce la importancia de este respaldo.

Del mismo modo, las alegaciones de que la Convención creará una burocracia difícil de manejar carecen de justificación. Sobre la base de la experiencia anterior, los Estados Miembros que han intervenido de cerca en los preparativos han trabajado arduamente para crear una secretaría reducida y eficiente, que estará integrada por profesionales muy cualificados y aprovechará la experiencia

y la pericia técnica existentes. Alrededor del 70% del personal contratado para la secretaría técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas intervendrá directamente en las actividades de verificación.

Muchos Estados en todo el mundo ya han examinado minuciosamente estas cuestiones y han llegado a la conclusión de que la ratificación de la Convención contribuiría no sólo a su propia seguridad, sino también a la seguridad internacional. No hay otra alternativa. Sin la vigencia de la Convención, el mundo seguirá enfrentándose al riesgo de las armas químicas, se mantendrá e incluso se multiplicará el peligro de la proliferación de dichas armas, y se sentará un precedente desastroso para otros acuerdos multilaterales similares negociados para otros sistemas de armas. Por lo tanto, creo que es importante transmitir a esta Comisión el mismo mensaje que el año pasado: hay que hacer todos los esfuerzos posibles para mantener el impulso político tendiente a lograr la pronta entrada en vigor de la Convención, su plena aplicación, y la pronta consecución de su composición universal. Esto incluye los esfuerzos constantes para asegurar que los Estados Unidos, la Federación de Rusia y otros Estados signatarios ratifiquen la Convención lo antes posible y para trabajar de consuno en aras de nuestra meta compartida de eliminar la amenaza de esta abominable clase de armas. No dudo de que los Estados Miembros demostrarán la voluntad y destreza políticas necesarias para que la Convención entre en vigor con éxito. De lo contrario, se perderá la oportunidad de hacer entrar en vigor un instrumento jurídico poderoso contra toda una categoría de armas de destrucción en masa.

Sr. Ali-Bakhit (Sudán) (*interpretación del árabe*): Señor Presidente: Como esta es mi primera declaración en este período de sesiones, en nombre de la delegación del Sudán deseo felicitarlo muy sinceramente por su elección a la Presidencia de la Comisión. También deseamos felicitar a los demás miembros de la Mesa por su elección. Puede estar seguro de la cooperación de mi delegación en el logro de los objetivos de desarme internacional de esta Comisión.

La Carta de las Naciones Unidas se basa, en su espíritu y en su letra, en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el arreglo pacífico de las controversias mediante la negociación, la mediación y el arbitraje. En este contexto, en este decenio se han producido importantes avances hacia la prohibición de las armas de destrucción en masa. Se han concluido varios convenios que han logrado que muchas regiones del mundo sean zonas libres de armas nucleares. Recientemente, la Asamblea General, en su quincuagésimo período de sesiones, aprobó el Tratado de prohibición completa de los ensayos

nucleares, mediante el cual —si hay voluntad política y buenas intenciones— se detendrá la carrera de armamentos nucleares y se prohibirá la fabricación de armas nucleares.

El desarme, como todos sabemos, es un deseo que todos los Estados expresaron en el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, celebrado en 1978. El Movimiento de los Países No Alineados ha continuado aprovechando todas las oportunidades para expresar este deseo. Todavía resuena en nuestros oídos el creciente clamor del Movimiento de los Países No Alineados y de muchos otros Estados de todo el mundo que durante el primer mes de este período de sesiones pidieron un desarme completo.

A pesar del interés de mi país y de la comunidad internacional por contener el peligro de las armas nucleares, también es nuestro deber enfrentarnos al peligro de las armas convencionales, que alimentan las llamas de los conflictos, derraman sangre, derrochan recursos e impiden el desarrollo. Varios oradores han señalado que un pequeño grupo de Estados produce y exporta esas armas, creando conflictos y causando desestabilización. Lo que está sucediendo en la parte meridional de mi país es un ejemplo: varias partes están suministrando al movimiento rebelde armas que destruyen personas y recursos. Esto estimula la perpetuación de la cultura de la guerra, con todas sus consecuencias adversas.

Es bien sabido que un tercio de las minas terrestres antipersonal y antitanque existentes en el mundo —30 millones de un total de 110 millones de minas— se encuentra en África. No es necesario que aborde aquí el peligro que representan esas minas, la repercusión que tienen en la seguridad humana y el papel que cumplen en la obstaculización del desarrollo. En este contexto, apoyamos la aplicación del Documento Final de la Conferencia de los Estados Partes encargada del examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, que se celebró este año. En ella se exhortó a los Estados que desplegaron esas minas a que colaboraran en su remoción y a que proporcionaran información y asistencia material y técnica. En este contexto, no puedo dejar de encomiar el importante papel desempeñado por el Gobierno del Canadá para abordar el problema de las minas. Deseamos expresar nuestro pleno apoyo a esos esfuerzos.

Mi país padece la amenaza de las minas, un millón de las cuales ha sido sembrado por el movimiento rebelde. Las minas continúan poniendo en peligro la paz y el desarrollo, incluso en zonas, como la parte meridional del país, en las

que se ha restaurado la estabilidad. Por tanto, mi país pide a la comunidad internacional que proporcione apoyo y asistencia técnica y material para la remoción de esas minas. Pide a los Estados que suministran minas a los rebeldes que desistan de hacerlo, con miras a preservar la seguridad de los civiles inocentes de la región.

La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida en julio de este año sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares fue recibida con respeto y aprecio por todos los Estados. En ella se recalcó de manera inequívoca la necesidad de proseguir los esfuerzos por lograr el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo. La opinión consultiva reavivó la esperanza en el desarme nuclear. No obstante, si examinamos la situación en el Oriente Medio, vemos que es alarmante por dos motivos. El primero es el avanzado programa nuclear israelí, que no está sometido al régimen amplio de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El segundo es la negativa de Israel a establecer una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio y su negativa a firmar el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP). Esto supone una amenaza para la seguridad de todos sus vecinos y de todos los Estados de la región del Oriente Medio. Es el único Estado de la región que no ha firmado el Tratado.

Señor Presidente: Estamos seguros de que usted comparte las ideas y preocupaciones que acabamos de detallar. Finalmente, deseo expresar nuestro apoyo a la convocación de un cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme. Esperamos que la Comisión apruebe esta propuesta como una de sus recomendaciones. Reafirmamos la disposición de nuestra delegación a cooperar y participar en el debate de todos los temas del programa de la Primera Comisión y en la aprobación de proyectos de resolución aceptables al respecto.

Sr. Andjaba (Namibia) (*interpretación del inglés*): Señor Presidente: Como esta es la primera vez que hago uso de la palabra ante la Comisión, permítame felicitarlos a usted y a los demás miembros de la Mesa por su elección. Estoy seguro de que su competencia y sus grandes dotes diplomáticas nos guiarán bien durante las deliberaciones de esta importante Comisión. Le garantizo el apoyo de mi delegación.

Hoy, a pesar del final de la guerra fría y de los profundos cambios que se han producido, todavía vivimos en un entorno de incertidumbre potencialmente desestabilizadora, caracterizada por la desconfianza entre las naciones. En esta

situación, y si no se les pone coto, las armas de destrucción en masa contribuirán sin duda a la inestabilidad mundial en términos de sufrimientos humanos.

A pesar de que el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares no aborda todos los aspectos del desarme nuclear, Namibia lo firmó porque cree que el Tratado demuestra la voluntad de la comunidad internacional de detener la diseminación de las armas nucleares.

Al respecto, mi delegación acoge con beneplácito la propuesta de programa de acción para la eliminación de las armas nucleares, que el Grupo de los 21 de los miembros no alineados presentó ante la Conferencia de Desarme y en la que se pide la eliminación gradual de las armas nucleares para el año 2020. Namibia opina que, una vez que se suprima de este mundo la pesadilla de las armas nucleares, la humanidad podrá vivir en paz y armonía.

En su opinión consultiva de 8 de julio de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el empleo de armas nucleares es contrario a las normas del derecho internacional y que su uso podría provocar sufrimientos indecibles a los seres humanos y destruir los ecosistemas del planeta, así como la civilización.

El avance más importante en el camino hacia el desarme ha sido el establecimiento exitoso de sendas zonas libres de armas nucleares en América Latina, el Pacífico sur, África y el Asia sudoriental, en virtud de los Tratados Tlatelolco, Rarotonga, Pelindaba y Bangkok, respectivamente, que en esencia hacen que el hemisferio sur y las zonas adyacentes constituyan una zona libre de armas nucleares. Estos acontecimientos son positivos y no deben pasar desapercibidos para los Estados poseedores de armas nucleares, sino que deben ser interpretados como una medida del deseo de la mayoría abrumadora del mundo de no vivir bajo la amenaza nuclear.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Namibia, Sr. Theo-Ben Gurirab, cuando se dirigió a la Asamblea General en el quincuagésimo primer período de sesiones, manifestó lo siguiente con relación al concepto de que las armas nucleares garantizan la paz mundial:

“Nadie me convencerá de la idea de que las armas nucleares garantizan la paz y la seguridad mundiales, el desarrollo, la prosperidad o la igualdad entre las naciones y nunca sucumbiré a ella. Por el contrario, estoy convencido de que la paz, el desarme, la democracia, la cooperación multilateral y la asigna-

ción de recursos pueden liberar el ingenio y la labioriosidad del ser humano en beneficio del desarrollo y el progreso social.” (*Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Sesiones Plenarias, 14ª sesión, pág. 6*)

Por lo tanto, el desarme nuclear no debe verse como una debilidad por parte de los Estados poseedores de armas nucleares, sino como un factor contribuyente a la paz y la seguridad internacionales.

Namibia, al igual que muchos otros países de África, Asia y América Latina, enfrenta la amenaza de las minas terrestres antipersonal, que han matado o mutilado a muchos civiles inocentes. La Comunidad del África Meridional para el Desarrollo y la Unión Europea han venido cooperando en el ámbito de la remoción de minas con los países afectados por esta amenaza en nuestra región. Instamos a los países que fabrican minas terrestres antipersonal a que prohíban la producción de estas armas mortíferas y acudan en ayuda de los países que han sufrido y siguen sufriendo los estragos de la guerra y las minas terrestres.

En este sentido, apoyamos las iniciativas en curso encaminadas a prohibir las minas terrestres antipersonal, así como la labor encomiable que realizan algunos países en la esfera de la remoción de minas. Debemos, pues, emprender todos juntos esta tarea. Por consiguiente, Namibia, celebra los esfuerzos internacionales orientados a prohibir las minas terrestres antipersonal a través de un instrumento jurídicamente vinculante.

Sr. Al-Hassan (Omán) (*interpretación del árabe*): Mi delegación concuerda plenamente con los que han hablado favorablemente de los logros singulares que se han alcanzado este año en las Naciones Unidas en la esfera del desarme nuclear. De hecho, con la firma del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que tuvo lugar en septiembre, y la emisión de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 8 de julio, en la que se dictamina que la amenaza o el empleo de armas nucleares sería, en general, contrario a las normas del derecho internacional y se confirma que los Estados tienen la obligación jurídica de proseguir de buena fe y llevar a su conclusión las negociaciones con miras al desarme nuclear, mi delegación considera que la comunidad internacional ha dado un nuevo paso hacia el logro de las nobles metas y objetivos que se establecieron cuando se crearon las Naciones Unidas, hace 50 años.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a fin de que intensifique los

esfuerzos para concertar una convención mundial sobre las armas nucleares en la que se estipule la prohibición y eliminación completas de las armas nucleares, de conformidad con las disposiciones del artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y con la buena fe a la que se insta en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

No es un secreto que el desarme en todos los aspectos sigue siendo el centro de atención de la comunidad internacional. Aunque, como sabemos, la guerra fría ha terminado, nuestra misión de alcanzar la paz y la seguridad internacionales aún no está completa. Sobre la base de estos acontecimientos, la Sultanía de Omán concuerda en que las armas nucleares todavía plantean la amenaza más grave a la paz y la seguridad internacionales. En consecuencia, compartimos la convicción de que en el futuro la comunidad internacional debe concentrarse más intensamente que nunca en el objetivo de la completa eliminación de estas armas por medio de esfuerzos nacionales e internacionales.

Una forma de hacerlo, a nuestro criterio, es trabajar sinceramente y de manera verdaderamente no discriminatoria en pro de la adhesión universal al régimen de no proliferación, que es precisamente lo que mi país hizo este año cuando anunció el 1º de octubre ante la Asamblea General su decisión de firmar el TNP. Al mismo tiempo, abrigamos la esperanza de que otros Estados, especialmente de la región del Oriente Medio, que todavía no lo hayan hecho firmen el TNP. Ello reforzaría las medidas de fomento de la confianza.

No ha sido una sorpresa que en los últimos años mi país apoyara el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio. Nuestro apoyo a esta propuesta no proviene del sentimiento; se basa en la realidad. Esa zona sólo podría servir para mejorar el proceso de paz. Asimismo, deseamos hacer hincapié en que la eliminación de las armas nucleares del Oriente Medio mediante el establecimiento de una zona libre de armas nucleares no tendrá efectos negativos para la seguridad de ningún Estado; por el contrario, mejorará y fortalecerá la seguridad de todos los Estados. Ha llegado el momento de abandonar la retórica sobre la situación singular de un Estado concreto, que se basa en una percepción errónea de la seguridad regional. La seguridad es una prioridad de suma importancia; a fin de que sea efectiva debe ser amplia y debe estar basada en buenas y genuinas intenciones. En consecuencia, formulamos un llamamiento a Israel, el único Estado de la región que no es Parte en el TNP y que no ha sometido sus instalaciones nucleares a las salvaguardias internacionales, para que adopte estas medidas.

La Sultanía de Omán cree que la Convención sobre las armas químicas es muy importante dado que preserva la paz y la seguridad internacionales, y, por lo tanto, firmó la Convención y fue el primer Estado del Oriente Medio en ratificarla. Al mismo tiempo que celebramos el hecho de que 64 Estados hayan firmado prontamente la Convención, esperamos que entre en vigor lo antes posible y que al mismo tiempo se adopten medidas políticas prácticas a fin de garantizar su carácter universal y de fortalecer su función en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Al respecto, mi delegación acoge con satisfacción las declaraciones formuladas por los Estados poseedores de armas químicas, en particular en relación con las medidas adoptadas por conducto de sus órganos constitucionales nacionales a fin de aplicar la Convención.

La Convención sobre las armas biológicas es otro de los tratados internacionales a los que nos hemos adherido. Si bien acogemos con satisfacción el hecho de que 138 naciones se hayan adherido a la Convención, esperamos que otros Estados también lo hagan, habida cuenta de la importancia de este instrumento en aras de la reducción de todas las armas de destrucción en masa. Al respecto, al tiempo que mi delegación celebra la Declaración Final de la Tercera Conferencia de examen, espera con interés la celebración de un debate fructífero encaminado a garantizar la conclusión con éxito de la Cuarta Conferencia de examen, que se celebrará en noviembre.

El Océano Índico es una ruta de tránsito de vital importancia para mi país; en nuestra calidad de miembros del Comité Especial del Océano Índico hemos hecho todo lo posible por ayudar al Comité en el cumplimiento de su mandato. Si bien acogemos con satisfacción el magro progreso alcanzado, nos sentimos decepcionados ante la posición adoptada por algunos Estados en relación con el Comité y su labor. Habida cuenta del ámbito internacional propicio, creemos que ha llegado el momento de examinar nuevamente el mandato y la labor del Comité y de considerar la adopción de medidas encaminadas a transformar al Océano Índico en una zona de paz.

Mi delegación concuerda plenamente con las opiniones expresadas por el Secretario General acerca de la amenaza que plantean las minas terrestres antipersonal, que causan la muerte de muchos civiles inocentes en todo el mundo. Mi país, la Sultanía de Omán, cree que la única forma de abordar ese problema es mediante la adopción de medidas concertadas en el plano internacional a fin de detener la adquisición y producción de esas minas, sin excepción.

Para finalizar, mi delegación desea expresarles a usted, Señor Presidente, y a todos los miembros de la Comisión su disposición a trabajar estrechamente con la Comisión a fin de alcanzar los nobles objetivos que compartimos y lograr que este período de sesiones sea de especial importancia en el camino hacia el desarme mediante el aprovechamiento del entorno internacional positivo y la superación de los retos reales que tenemos ante nosotros. Entre los numerosos y amenazadores desafíos que la comunidad internacional debe examinar con detenimiento se encuentra la eliminación completa de las armas nucleares y la materialización de los anhelos de los pueblos y países del Oriente Medio de que esa parte del mundo sea declarada zona libre de armas nucleares y de armas de destrucción en masa.

El Presidente (*interpretación del inglés*): Tiene la palabra el Secretario de la Comisión.

Sr. Lin Kuo-Chung (Secretario de la Comisión) (*interpretación del inglés*): Como bien saben los representantes, el martes 29 de octubre a las 18.00 horas vence el plazo para la presentación de los proyectos de resolución sobre los temas del programa relativos al desarme y a la seguridad internacional. Al respecto, deseo informar a los miembros de la Primera Comisión de lo siguiente.

Habida cuenta de la actual situación financiera de la Organización, y de conformidad con la decisión adoptada por la Junta de Eficiencia, el año próximo no se enviará a los Estados Miembros ninguna nota verbal del Secretario General relativa a las resoluciones en las que se pide al Secretario General que presente informes a la Asamblea General, incluidos los que contengan opiniones u observaciones sobre cuestiones específicas. En consecuencia, y a fin de facilitar la preparación de los informes de la Secretaría, en los proyectos de resolución en los que se pide que el Secretario General presente informes a la Asamblea General debe figurar la siguiente disposición estándar:

“Pide a los Estados Miembros” o “a todos los Estados” o “a los Estados de la región” —según las circunstancias— “que comuniquen al Secretario General sus opiniones u observaciones sobre la cuestión a más tardar el 15 de abril de 1997”.

De hecho, esta disposición ya existe en las resoluciones relativas al Registro de Armas Convencionales, de las

Naciones Unidas, a la Convención sobre las armas biológicas y al sistema internacional para la normalización de los informes sobre gastos militares. Si las delegaciones interesadas lo solicitan, la Secretaría se sentirá complacida en prestar asistencia en la inclusión de la disposición específica en el proyecto de resolución.

El Presidente (*interpretación del inglés*): La Comisión toma nota de la declaración del Secretario.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.